

# El fracaso final de Carlos Andrés Pérez

**T**ras su fulgurante ascensión en segundo mandato presidencial, Carlos Andrés Pérez fue destituido de la presidencia venezolana en 1993, y expulsado de su partido en junio de 1994. Ya en 1992 estuvo a punto de la destitución violenta a manos del ejército. ¿Qué pasó desde que en 1989 fue elegido por más de la mitad de los votantes? Éste es el cometido del presente artículo: analizar las causas del fracaso de la estabilización económica y de la reforma estructural, y el éxito de la corrupción. Tras la caída del presidente, el autor saca las lecciones que se deducen para el futuro de Venezuela.

Raúl González Fabre \*

**A** finales de agosto de 1994, el partido de Acción Democrática (AD) expulsó de su Comité Ejecutivo Nacional a cinco jóvenes dirigentes afectos al ex presidente Carlos Andrés Pérez, dando así comienzo a una pugna interna cuyo fin es desterrar el «perecismo» de los órganos directivos de AD. Carlos Andrés Pérez, en dos

\* Jesuita. Miembro del Centro Gumilla de Investigación y Acción Social y del Consejo de Redacción de la revista «SIC». Caracas, Venezuela.

ocasiones presidente de Venezuela, había sido expulsado a su vez en junio.

No es ésta su única desventura: vive ahora recluido por orden judicial en su quinta de Oripoto, donde espera sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tras haber pasado un par de meses en la cárcel «de lujo» de El Junquito. Se le sigue un proceso por peculado y malversación de fondos de la partida secreta del Ministerio del Interior. Cuando, a mediados de 1993, la Corte determinó que había motivos para iniciar el juicio, el Senado le destituyó de la presidencia, de tal forma que no fue él, sino el presidente provisional, Ramón J. Velásquez, quien entregó el poder a Rafael Caldera en febrero de 1994.

De cualquier forma, este año y aun el pasado han sido tranquilos para Carlos Andrés Pérez, si se comparan con 1992, en que estuvo dos veces a punto de ser violentamente destituido por asonadas militares, o de 1989, cuando una sublevación popular masiva («el caracazo»), acabó con toda posibilidad de respaldo de la población a su programa de reforma económica.

Precisamente la habilidad para interpretar el rechazo popular a las medidas económicas neoliberales (y a la corrupción) del gobierno de Carlos Andrés Pérez, es lo que catapultó a Caldera, un veterano dirigente al borde del retiro definitivo, a la presidencia. Además de su imagen de honestidad y capacidad, a Caldera le bastó identificar otros candidatos relevantes con Pérez o con su paquete económico para descalificarlos ante la población, y ganar las elecciones a las maquinarias de los grandes partidos.

Dentro de Venezuela, el fracaso político de Carlos Andrés Pérez parece pues definitivo e irremediable. Y, sin embargo, cuando a comienzos de febrero de 1989 asumía la presidencia con más de la mitad de los votos emitidos, las perspectivas eran muy distintas. Apoyado en su carisma político y en tecnócratas de primera fila, Pérez intentó modernizar la estructura económica venezolana, abriéndola al libre comercio y a la competitividad, con un programa semejante al que ha tenido éxito variable en diversos países de América Latina.

El fracaso venezolano, el más rotundo de todos, aún asombra a los economistas neoliberales. Y, sin embargo, es indudable: a él se debieron las agitaciones populares incesantes, las rebeliones militares, la derrota política de Carlos Andrés Pérez, en fin. Trataremos aquí de explicar en qué consistió el intento de su segundo período presidencial, cómo se

trenzaron el hilo político y el económico para impedir su éxito, y terminaremos con algunas consideraciones acerca del problema político venezolano que pueden extraerse de los acontecimientos de estos años.

## El problema nacional

LA estructura económica venezolana ha sido descrita como un capitalismo rentista, de organización política populista. La aparente contradicción entre «renta» y «capital» quedó resuelta en los programas políticos venezolanos de este siglo de una manera tal vez demasiado sencilla: en vez de realizar la acumulación originaria que un capitalismo moderno requiere por la vía de la explotación del trabajo por los propietarios del capital, en Venezuela podemos hacerla empleando la renta petrolera que el Estado recibe y distribuye. De esa manera, a la vez se construyen las bases de un capitalismo competitivo y se evitan los conflictos sociales que llevan al antagonismo de clases.

Por otra parte, puesto que se trata de realizar el paso de un país agrícola a otro industrial, del atraso a la modernización, es fundamental que el pueblo venezolano haga él mismo ese tránsito. No bastan empresas modernas, sino que son precisas personas modernas. Para ello, el Estado se constituye de nuevo en protagonistas: empleará parte de la renta petrolera para desarrollar servicios públicos —salud, educación, saneamiento, electricidad, transporte—, subsidiará bienes de consumo y ofrecerá abundantes posibilidades de empleo público. Si el acceso a los servicios o al empleo queda íntimamente conectado a la lealtad prestada al partido que controla su distribución, tenemos nuestro sistema político populista: desarrollo del pueblo dentro de un esquema clientelar.

Pues bien, el capitalismo rentista-populista proporcionó a Venezuela una envidiable estabilidad política desde 1958 a 1988. Después de varios avisos a lo largo de un quinquenio, para finales de 1988 la renta petrolera se mostró por completo incapaz de seguir sosteniendo el sistema: los precios del crudo en el mercado internacional bajos, agotado el crédito de la República ante la banca, y en números rojos las reservas internacionales. Ésta fue la situación que encontró Carlos Andrés Pérez al llegar por segunda vez a la presidencia. Tras ella alentaba la crisis definitiva del sistema, y la gran cuestión nacional: ¿cómo sostener esta sociedad en progreso y estabilidad, una vez terminada la capacidad de la renta petrole-

ra para sustentarla? o, en otras palabras, ¿cómo pasar de una sociedad rentista a una sociedad productiva?

## El problema Carlos Andrés Pérez

ANTES de entrar en el planteamiento de las soluciones que Pérez y su equipo económico intentaron darle a estas preguntas, es preciso atender a una cuestión obvia: ¿necesitaba todavía Venezuela en 1989 las andaderas de la renta petrolera, tras tantos años de esfuerzo modernizador regado con petrodólares?

La respuesta es obvia para cualquier microeconomista: donde hay renta crecientemente disponible, difícil es que surja capitalismo, porque los movimientos psicológicos de apropiación de la renta y de riesgo capitalista no son fácilmente compatibles entre sí. Pueden tal vez combinarse, pero la condición para ello es que a los potenciales empresarios les resulte difícil acceder a la renta. Tal vez por esa razón, junto a otras de índole cultural, en Venezuela una cantidad desproporcionada de empresarios son de origen extranjero.

Desde 1973 a 1983, la renta petrolera creció y se distribuyó en la sociedad venezolana a través de mecanismos variados, la mayor parte de los cuales coincidían en no exigir realmente ninguna contrapartida productiva a lo que se entregaba: sobrevaluación de la moneda, empleo público, servicios gratuitos, ausencia de impuestos, subsidios masivos, créditos sin retorno al empresariado, corrupción... Por otra parte, con los mercados cerrados para proteger a la producción nacional, no era difícil prosperar a empresas industriales y comerciales que recogieran parte de la riqueza circulante en la sociedad, sin necesidad de que su éxito empresarial se vinculara con competitividad. Venezuela se convirtió en un mercado oligopólico con amplios márgenes de ganancia y baja eficiencia en las empresas.

El impacto fue grande en la cultura económica nacional. No se estableció relación entre producto y prosperidad personal, sino que se consolidó la relación —por lo demás clásica en los países de cultura hispana— entre posición sociopolítica y riqueza. Estar bien conectado al poder por vía familiar, de amistad o participación partidista, por la posición social o la corrupción... llegó a ser la forma más expedita de participar con la tajada del león en el reparto de la renta.

El resultado fue una desigualdad social creciente: desde 1979, el ingreso real promedio de los asalariados empieza a caer, mientras se siguen amasando grandes fortunas, principalmente a través de pseudoempresas públicas y privadas, industriales, comerciales y financieras. Conscientes de la fragilidad de su base, estas fortunas prefieren emigrar a bancos extranjeros, y el país se empobrece mientras ve a una parte de la población —cada vez más reducida— enriquecerse ostensible y ostentadamente.

1979 es precisamente el año en que Carlos Andrés Pérez termina su primer período presidencial. Esto permite comprender cómo su propia historia labró buena parte de su fracaso. El primer período de Pérez se caracterizó por una subida vertical de la renta petrolera venezolana a raíz de la crisis de Oriente Medio (1973) y de la nacionalización (1975). Este alza fue reforzada comprometiendo renta futura a través de la contratación de abundante deuda externa. El gobierno vertió sobre la sociedad semejante caudal de recursos, con grandes planes de industrialización y generosas dádivas a través de los mecanismos mencionados arriba.

El resultado fue la efectiva elevación del nivel de consumo de toda la población, de forma que los salarios reales crecieron, como se ha señalado. Al tiempo, quienes estaban cerca del poder, tanto funcionarios como empresarios, se enriquecieron enormemente, incluido el presidente mismo. Terminado su primer período constitucional, un solo voto en el Congreso le salvó de ser enjuiciado por corrupción. De forma que, para los electores de 1988, Carlos Andrés Pérez era el hombre que condujo al país durante un período de prosperidad extraordinaria y, a la vez, de corrupción nunca antes vista.

Durante su campaña electoral de 1988, Pérez transmitió la imagen de que seguía siendo el mismo y de que con él era posible el retorno al pasado rentista. El impacto de esa esperanza fue tan grande como para hacerle ganar las elecciones con el 53 por 100 de los votos, pese a la consciencia del peligro de corrupción.

El recién electo presidente malentendió el mandato que recibía: pensó que se trataba de una confianza incondicional en él como líder para guiar a la nación hacia un horizonte no rentista, cuando sencillamente sus votantes le estaban exigiendo lo imposible, lo que había prometido simbólicamente con su campaña: volver al pasado. Semejante mala comprensión fue clave a la hora de formular su programa de ajuste macroeconómico, y también a la hora del fracaso de éste.

## El programa de estabilización macroeconómica

LA primera urgencia con la que se encontró el gabinete económico de Pérez fue la derivada de los déficits en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales, a los que ya no había reservas internacionales para responder. El Estado se acercaba a la bancarrota. Estos dos desequilibrios estaban siendo alimentados por otros: desequilibrio financiero, con tasas de interés pasivas por debajo de la inflación, estimulando la salida de capitales; y desequilibrio cambiario, con una tasa de cambio controlada y sobrevaluada que fomentaba la importación.

Los economistas de Carlos Andrés Pérez aceptaron el enfoque del Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de las causas de esta situación: el país venía viviendo por encima de sus posibilidades. La variable que debía ajustarse era la demanda interna, el consumo de los venezolanos. Se emprendió entonces un plan de ajuste macroeconómico ortodoxo —en el sentido neoliberal en que «ortodoxia» se entendía hacia 1989—, con el que el gobierno se comprometía firmando una carta de intención con el FMI.

Para corregir el desequilibrio en la balanza de pagos se contrajo la demanda privada, a fin de disminuir las importaciones y liberar la oferta para la exportación. Para corregir el déficit fiscal y liberar recursos para el pago de la deuda externa, se contrajo el gasto público.

El mecanismo fundamental del ajuste fue la devaluación del bolívar —moneda nacional—, inicialmente de un 150 por ciento. Simultáneamente se liberaron los precios controlados y se fueron eliminando subsidios, de tal manera que disminuyera el ingreso real de la población y se contrajera su demanda. El costo social era pues un ingrediente constitutivo del plan, y no puede considerarse como una prueba de su fracaso económico.

Sin embargo, fue la causa de su inmediato fracaso político. No había pasado un mes de la asunción de la presidencia por Pérez cuando una subida del precio de la gasolina ocasionó la del transporte público, un ingrediente de mucho peso en el presupuesto familiar del 40 por ciento más pobre de la población. Instantáneamente, en el terminal de autobuses de Guarenas, una ciudad-dormitorio cercana a Caracas, se inició una protesta violenta que horas después se extendía con saqueos masivos en la capital y en una docena de las mayores poblaciones del país. En total, unos tres mil negocios fueron saqueados.

El presidente se vio obligado a decretar toque de queda al cabo de dos días de desórdenes, y a sacar el ejército para una represión sangrienta. Con su incapacidad para rectificar, o al menos mostrar la voluntad de hacerlo, ganó la enemistad cerrada de toda la población perjudicada por el ajuste y violentamente defraudada en sus expectativas. Sólo quedaron de su lado el sector público y el exportador —beneficiados por la devaluación—, los trabajadores y empleados altamente cualificados cuyos sueldos estaban indexados, y el sector financiero, protegido y protector del gobierno. Como esto ocurrió cuando sólo llevaba un mes de gobierno, es fácil comprender el calvario que le esperaba en los casi cinco años restantes.

Los tecnócratas del gobierno acentuaron la gravedad de la oposición, empeñándose por motivaciones ideológicas en continuar el programa como si nada hubiera pasado. Insensibles a lo social, demoraron casi dos años en implementar políticas sociales compensatorias para los más pobres. Prepotentes para lo político, toda la concertación que intentaron fue la de presentar hechos consumados y pedir fe para su ciencia, prometiendo mejoras a corto plazo. Como éstas ya no podían ocurrir, decayó el poco apoyo que conservaban entre las clases medias y profesionales. Carlos Andrés Pérez, responsable de conseguir apoyo político para el ajuste macroeconómico, actuó de manera semejante. La sensación de que unos pocos se enriquecían mientras todos los demás se empobrecían como nunca, hizo sentir su campaña electoral como un gigantesco fraude. La acusación de corrupción contra el presidente y su entorno, objetivamente sustentable, le ganó, ahora sí, el repudio masivo de la población, e hizo inviable la reforma estructural de la economía.

## El programa de reforma estructural

LA reforma estructural pretendía dar respuesta a la gran cuestión nacional: transformar la economía de rentista en productiva. Para ello se propuso un modelo nítidamente liberal: el Estado dejaba de ser el protagonista de la modernización en Venezuela, para traspasar ese papel al mercado libre, al que se atribuyen todo género de bondades en productividad y eficiencia distributiva.

En Venezuela, ese cambio suponía una diferencia radical con la situación anterior. A diferencia del derecho minero anglosajón, los países his-

panos reconocen al Estado la propiedad de la riqueza del subsuelo. Petróleo y minerales, las mayores fuentes de riqueza de Venezuela, son propiedad estatal. Pasar al mercado el protagonismo del desarrollo económico significaba entonces quitárselo al petróleo y a la inversión estatal, para pretenderlo por la vía de las llamadas «exportaciones no tradicionales» y la inversión privada.

La primera de las reformas previstas era la comercial-arancelaria, que abrió el mercado interno a la competencia exterior y modificó la legislación añadiendo leyes antimonopolio, antidumping, de propiedad intelectual, etc. Esta reforma pudo realizarse casi por entero muy rápidamente, con gran deterioro para la pequeña y mediana industrias nacionales, que no pudieron en plazo tan corto competir con el sudeste asiático. Los sectores con capacidad de exportar, sin embargo, conocieron crecimientos importantes a corto plazo, al calor de la devaluación de la moneda y la caída de la demanda interna.

La reforma de la administración pública pretendía redefinir el papel del Estado, ahora al servicio del mercado. Para ello era imprescindible reducir su tamaño privatizando empresas públicas, reorganizarlo a través de la descentralización y mejorar su capacidad de gestión. El éxito en estos tres propósitos fue variable. El gobierno central se desprendió por vía de privatización de unos 50.000 empleados —de un total de 1.300.000 para 20 millones de habitantes—, y traspasó algunas funciones a los estados. El mayor fracaso ocurrió en la reforma de los ministerios, que mostró una gran resistencia por parte del funcionariado, llegando al sabotaje de las iniciativas de los ministros.

Es fácil comprender por qué ocurrió esto: en Venezuela prácticamente no existe una burocracia de carrera, sino que a todos los niveles habían venido operando esquemas clientelares de acceso al empleo público. Ser funcionario no es una forma de participar en la producción social de bienes, sino en la distribución social de renta. En el contexto político mencionado arriba, el gobierno no poseía la autoridad moral ni política precisa para lograr la «conversión» del aparato del Estado, ni podía emplear la fuerza —de los despidos, por ejemplo— sin enajenarse la oposición de la población y los poderosos sindicatos de trabajadores públicos, respaldados por los partidos populistas —principalmente por AD, el partido de Pérez—.

Los grandes partidos populistas hicieron fracasar asimismo la reforma fiscal, deteniéndola *sine die* en el Congreso. Con ella se quería dotar al

Estado de fuentes de ingresos estables y diversificadas —no dependientes del precio internacional del petróleo—, aumentar la eficacia de la recaudación fiscal y racionalizar el gasto público. Esto último fue impedido también por la burocracia, que no podía comprender cómo le pedía sacrificios quien no los hacía.

En conjunto, la sociedad no logró asimilar la idea de que el Estado debe sostenerse de los ciudadanos, cuando el esquema rentista es el inverso. Pérez no gobernó con su partido, sino que más bien lo dejó en la incómoda situación de ser el partido de un gobierno cuyas políticas neoliberales no creía —AD es ideológicamente socialdemócrata—, y que veía searle las bases populistas constitutivas de su fuerza electoral. El resultado del bloqueo de los partidos fue el retroceso en el área fiscal: la recaudación no petrolera descendió del 4 por 100 al 2 por 100 del PIB.

Por último, el programa preveía una reforma a fondo del sistema financiero, con autonomía del Banco Central en materia monetaria, apertura a la banca comercial extranjera y fortalecimiento de las instituciones de fiscalización y control de la banca privada.

Salvo lo referente al Banco Central, las demás reformas financieras no fueron llevadas a cabo. Las razones hay que buscarlas en la oposición del poderoso sector financiero, principal respaldo de Pérez, que estaba haciendo grandes negocios especulativos —de los que el mismo presidente se beneficiaba indirectamente—. Hubo incluso unos meses en que el presidente del Banco Central —Pedro Tinoco— era al mismo tiempo gerente del Banco Latino y presidente de la Asociación Bancaria privada. No por casualidad, el Banco Latino pasó de ser el séptimo a ser el segundo del país en ese período, y no por casualidad cuando Pérez cayó el Banco Latino se desplomó, dando inicio a una gigantesca crisis financiera con la que Caldera está enfrentándose.

En síntesis, varios grandes errores fueron cometidos: desconocer que la apertura comercial acabaría convirtiéndose en un traje a la medida de los grandes oligopolios industriales, que la aprovecharon para bloquear la competencia extranjera y aplastar la pequeña y mediana empresa; no plantear la responsabilidad social del empresariado, dejándolo con las manos libres en posiciones de fuerza; ignorar la especialidad de Venezuela como país petrolero, pretendiendo asignar al Estado el rol que le corresponde en un esquema neoliberal puro; y aplicar de inmediato las medidas regresivas dejando para más tarde las generadoras de bienestar, de tal manera que los costos del ajuste y la apertura externa no fueron

compensados por los beneficios de la modernización del fisco, la reforma de la administración y del sistema financiero.

Con tenacidad propia de visionarios, Pérez y su equipo de tecnócratas se empeñaron en desconocer la estructura real de la economía venezolana, la índole del propio soporte político que poseían, y la cultura económica rentista de los venezolanos. Plantearon un *tour de force*, y lo perdieron.

## La caída de Carlos Andrés Pérez

A mediados de 1991 era evidente que las estrategias intentadas de crecimiento hacia afuera, primero a través de las «exportaciones no tradicionales», luego mediante «megaproyectos» industriales en áreas en que Venezuela podía ofrecer buenas ventajas comparativas —como minerales, petroquímica o turismo—, habían fracasado, y que las reformas estaban estancadas. La guerra de Kuwait ayudó a pasar el año con crecimiento, que continuó en 1992 gracias a los ingresos no recurrentes de algunas grandes privatizaciones. El gobierno, sin embargo, no tenía ya un horizonte de proyecto económico capaz de mover a las fuerzas productivas del país y suscitar apoyo político. Fue definido como un «cadáver insepulto».

El año 1992 conoció dos intentos de darle sepultura: golpes de Estado en febrero y noviembre. Los golpes fueron protagonizados por militares de graduación media, comandantes de unidad disconformes con el empobrecimiento de la población y el de los mismos militares, el papel que se les había hecho desempeñar en la represión de las agitaciones sociales, y la corrupción de los altos mandos comprometidos con Pérez. Los golpes fracasaron, pero su triunfo político fue indudable: suscitaron el apoyo afectivo de la población, que los vio como camino de protesta y no de dictadura. Emergió con fuerza un pequeño partido de izquierda, la Causa Radical, hasta arrebatarle la alcaldía de Caracas a AD. Y resucitó políticamente Rafael Caldera.

Durante 1993, la evidencia de que un nuevo golpe liquidaría el sistema movilizó a las fuerzas comprometidas con el mismo para acabar con Carlos Andrés Pérez antes de que su desprestigio acabara con todos. El fiscal general, que en Venezuela es independiente del ejecutivo, introdujo ante la Corte un proceso por corrupción contra el presidente. Con sor-

presa de muchos, la Corte encontró méritos, que el Senado ratificó de inmediato casi por unanimidad, deponiendo a Carlos Andrés Pérez y nombrando un presidente provisional. Como hemos mencionado, la fuerza electoral de Rafael Caldera en diciembre de 1993 se apoyó fundamentalmente en su imagen personal opuesta a la de Carlos Andrés Pérez: antidogmatismo económico, populismo moderado, honestidad a toda prueba, sensibilidad hacia la situación de las mayorías populares, capacidad de hacer equilibrios en el delicado sistema político venezolano.

### ¿Qué nos enseña Carlos Andrés Pérez

**E**L fracaso de Pérez deja abierta la gran cuestión nacional del paso a una sociedad productiva. Venezuela no ha conseguido darle respuesta, y el deterioro de las condiciones de vida y de la organización social continúa, agudizado por las consecuencias de los errores del pasado gobierno. Sobre los caminos que propone Caldera a este respecto podremos tratar en un artículo posterior, cuando se aclaren algo más.

Mientras tanto, hay enseñanzas importantes que la sociedad venezolana está extrayendo. En primer lugar, que al plantear un modelo económico no debe ignorarse la estructura real de la economía que pretende transformar. En particular, Venezuela cuenta con un sector privado oligopólico de gran capacidad financiera—en unos 200 mil millones de dólares se estiman los depósitos privados venezolanos en el exterior, unas seis veces la deuda externa pública del país—. Pero la conciencia de responsabilidad social por la competitividad y la distribución del producto es muy pequeña en este sector. También lo es su compromiso con la producción: se concibe a sí mismo más bien enajenando la renta petrolera, dominando mercados sin competencia, o en operaciones especulativas, porque de ahí ha derivado su riqueza desde siempre. Para mantener este esquema, el gran sector privado está dispuesto a emplear toda la fuerza política que sus recursos le dan, financiando campañas políticas, corrompiendo funcionarios y empleando los medios de comunicación social. Una política que ponga en su sitio al sector privado y le cierre vías de enriquecimiento no productivo es imprescindible.

La segunda lección se refiere al aparato del Estado. Sin reformarlo a fondo no es posible encontrar caminos de futuro para el país, porque los

cambios fundamentales serán bloqueados por un funcionariado que tiene empleo sin trabajo y con abundantes oportunidades de corrupción. Sin embargo, la reforma en Venezuela no debe necesariamente consistir en reducir el aparato del Estado a mero garante del mercado. Por el contrario, la persistencia de la renta petrolera en manos estatales permite que en Venezuela el Estado sea un auténtico productor de servicios sociales, que faciliten a una población empobrecida —43 por 100 de pobreza crítica a principios de 1994— incorporarse a los mercados con alguna posibilidad de éxito. La acumulación de capital humano, en que Venezuela es pobre en su conjunto, puede entenderse como la gran tarea futura del aparato del Estado. El desafío consiste en aumentar su productividad para esa acumulación.

La tercera lección es que ese desafío sólo puede superarse enfrentando con seriedad el problema de la cultura política populista, que buena parte de la población posee, y en la que se apoyan los grandes partidos y los sindicatos. He aquí un equilibrio en verdad difícil: cómo obtener de la población el apoyo suficiente para atacar los focos del populismo en el funcionariado y la clase política, cuando esa misma población comparte en buena medida los sentimientos populistas. El rechazo de la población a la retirada del Estado, que la deja en manos de los oligopolistas, le lleva a desear la vuelta al viejo esquema inviable del capitalismo rentista del Estado. La única forma de obtener apoyo social consiste en mostrar que, puesto que la renta petrolera ya no basta, sostener el populismo significa que los mejor situados se enriquecerán a costa de los peor situados en el sistema. El Estado puede entonces proponerse a sí mismo como quien controla a los oligopolios privados y a los beneficiarios del populismo, y como quien facilita oportunidades a la población para participar en mercados competitivos.

La cuarta lección que puede aprenderse de la presidencia de Pérez es que la apertura a los mercados internacionales resulta imprescindible y constituye la clave de la salida para el país, pero sólo si se hace de forma matizada. En efecto, programas como la integración con Colombia han resultado en un incremento grande —del orden del 400 por 100— del volumen de comercio bilateral. La estructura productiva venezolana necesita de la competencia exterior para disminuir el poder de los oligopolios, acercar los precios a los costos de producción y estimular la productividad. Sin embargo, el paso de un mercado nacional cerrado a uno abierto no puede hacerse bruscamente por decreto. Ningún sector debe

abrirse sin dar oportunidades de reconversión a los perdedores, a quienes no pueden reconvertirse por sí mismos. De lo contrario, la apertura comercial constituirá un suicidio político.

Otra lección importante consiste en que un cambio tan radical de la constitución económica del país no puede hacerse con base en la fe en un líder que interpreta a su pueblo, como cuando la sociedad venezolana era menos compleja. Son precisos consensos más amplios, en que todos los afectados tengan una voz políticamente efectiva. Los partidos del sistema populista —que sustituyen a la vez que representan a la sociedad civil— ya no son ni pueden ser esa voz. Y el sistema mismo está caducando, como se nota en la imposibilidad de proveer los consensos fundamentales cuando no hay renta petrolera para «aceitarlo». La sociedad venezolana habrá de crecer en capacidad de participación, organización y diálogo para las negociaciones sociales, de tal manera que el producto sea repartido en proporción al aporte productivo de cada cual, y no a su cercanía a los centros de poder. Partidos y sindicatos están en la alternativa de cambiar sus roles o desaparecer, bien por la vía del rechazo de la población, bien por la de una salida autoritaria.

Finalmente, hemos tenido la oportunidad de aprender que no debe jugarse con las expectativas populares ni con el ascendiente carismático de los líderes. La honestidad tanto política como económica del liderazgo parecen ahora imprescindibles para reconstituir la nación y la cultura pública de los venezolanos. Esa reconstitución habrá de ser también ética, algo que Pérez estaba personalmente incapacitado para comprender.

De cambios como los que se señalan arriba depende en buena medida que Venezuela transforme su democracia, o bien la pierda en la anomía social y/o el autoritarismo. El fracaso de Carlos Andrés Pérez es algo más que el de un hombre o un programa. Muestra cómo la sociedad venezolana está en verdadero riesgo de atascarse en un callejón sin salida, de tal manera que el programa modernizador del capitalismo rentista y populista, con el que se comprometió a lo largo de treinta años hasta hacerlo cultura, le cierre incluso la posibilidad de ver otro horizonte.